

La consulta plantea, si al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se puede recabar información relativa al solar y vivienda a un Ayuntamiento y que datos de carácter personal puede ceder la consultante al Ayuntamiento.

Con carácter general y partiendo del primer supuesto descrito en la consulta, debe indicarse que la comunicación de datos solicitada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Tal y como determina el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, entre los que cabe destacar aquellos casos en que una norma con rango de Ley dé cobertura a la cesión.

La Ley 8/2007 reguladora del Suelo, prevé en el artículo 4 los derechos de los ciudadanos en relación con la información que se puede recabar de las Administraciones, señalando en sus apartados c y d que los ciudadanos tiene derecho a “c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

d) Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.”

Es por ello, que la comunicación de la información requerida por la entidad consultante al Ayuntamiento, se encuentra amparada en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, dado que la Ley del Suelo, prevé que los ciudadanos tengan derecho a ser informados sobre la ordenación urbanística, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

En consecuencia, la información que otorgue el Ayuntamiento, afectará en exclusiva a la ordenación urbanística y las condiciones urbanísticas

aplicables a determinados terreno. No obstante, dado que la información solicitada por la entidad consultante, alude a la finalización de la obra y teniendo en cuenta que se entiende por ordenación urbanística a tenor del artículo 3 de la citada Ley que señala " La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:

a) La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados.", podemos entender que si podrán recabar información sobre la construcción y edificación.

Respecto a la segunda cuestión planteada, dado que no se determina para que finalidad concreta requiere el Ayuntamiento información de carácter personal, no se puede otorgar una respuesta, pues el principio de finalidad es la pieza angular en la protección de datos se contempla en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor "Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenidos". Por ende, si desconocemos las finalidades para las que se solicita la información no podemos determinar si la comunicación se encuentra amparada en la Ley Orgánica 15/1999.